



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Sala de Decisión de Tutelas n.º 2

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2022

Doctor

JUAN CARLOS SANTACRUZ LÓPEZ

Magistrado

Sala Penal Tribunal Superior de Buga

E. S. D.

Ref: Acción de tutela 2022-00444

Accionante: ARCEDIANO SEGURA

Accionado: Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Buga y la Sección de Revisión de Sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Respetado Doctor Santacruz:

En relación con el asunto de la referencia, de manera atenta me permito hacer las siguientes consideraciones:

1. Según se advierte de la demanda de tutela, ARCEDIANO SEGURA invoca la protección de sus garantías fundamentales, presuntamente vulneradas por el Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Buga y la Jurisdicción Especial para la Paz; el primero, en razón a la supuesta violación

al debido proceso al condenarlo el 14 de junio de 2018, tras suscribir un preacuerdo con la fiscalía en el cual aceptó la comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado, en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado, negociación de la cual ahora reniega bajo el pretexto de no haberla consentido.

Así mismo, se queja de la decisión adoptada por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz que, el pasado 18 de junio, concluyó con el rechazo de plano de la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición presentada por el accionante.

2. Ahora bien, según el informe secretarial por cuyo medio se nos corrió traslado de la acción de tutela que se examina, mi interés en este asunto se restringe al hecho de que actué como ponente en el trámite de extradición que se adelanta contra el actor, radicado interno No. 59.402, por petición del Gobierno de los Estados Unidos de América, en virtud de la Acusación 4:20-cr-254, en el que se destacan los siguientes antecedentes:

2.1. Mediante oficio del 29 de abril de 2021, el Ministerio de Justicia y del Derecho le comunicó a la Corte que el Gobierno de los Estados Unidos de América, por intermedio de su Embajada en Colombia y con Nota Verbal No. 0075 del 19 de enero de 2021, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano ARCEDIANO SEGURA, requerido para que comparezca a juicio ante la Corte Distrital de dicho país para el Distrito Oriental de Texas, por cargos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. Lo anterior, acorde con la acusación 4:20CR-254 o también conocida como caso 4:26-cr-254 (Jordan).

2.2. Con fundamento en lo anterior, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución emitida el 20 de enero de 2021, ordenó la captura con fines de extradición del mencionado ciudadano. La privación de la libertad se hizo efectiva el 27 de enero siguiente, por servidores adscritos al Grupo de Investigación Judicial de la DIJIN, en el municipio de Buga (Valle del Cauca).

2.3. A continuación, con Nota Verbal No. 0469 del 24 de marzo de 2021, la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición y allegó la documentación pertinente, traducida y legalizada.

2.4. Luego de formalizada la petición de extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales con Oficio S-DIAJI-21-006550 del 24 de marzo de ese año, dirigido a su homólogo de Justicia y del Derecho, conceptuó que entre los Estados Unidos de América y Colombia se encuentran vigentes las siguientes convenciones multilaterales en materia de cooperación judicial mutua: (i) la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 y (ii) la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Nueva York el 27 de noviembre de 2000. Igualmente, señaló que, a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas se regularán por lo previsto en el ordenamiento jurídico interno colombiano.

2.5. Por su parte, el Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, con oficio MJD-OFI21-0012714-DAI-1100, remitió a esta Corporación toda la documentación traducida y legalizada que presentó la Embajada de los Estados Unidos de América, teniendo en cuenta que se encuentran reunidos los requisitos formales exigidos en la normatividad procesal penal aplicable.

2.6. Recibidas las diligencias en esta Corporación, con auto del 8 de junio del 2021 se reconoció personería al abogado designado por ARCEDIANO SEGURA y se corrió el traslado del que habla el inciso primero del artículo 500 de la Ley 906 de 2004.

2.7. El 3 de diciembre de 2021, el defensor del requerido, por su parte, entregó un memorial en el que enuncia que su prohijado es miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular -FARC- EP. Para demostrarlo, aportó copia de la Resolución OACP No. 020 del 18 de agosto de 2017 *“por la cual se recibe y acepta un listado entregado por el miembro representante autorizado por las FARC-EP de personas que dicha organización reconoce como integrantes de la misma”*, en el cual aparece el nombre del requerido. Así mismo, allegó el Oficio OFI21-00149676/IDM13020000 con el que el Asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz remitió a ARCEDIANO SEGURA la resolución en comento.

Con base en lo anterior, solicitó a la Corte suspender el trámite de extradición hasta tanto la Jurisdicción Especial para la Paz adopte una decisión de fondo sobre la aplicabilidad de la garantía de *no extradición* respecto de la petición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

2.8. En escrito recibido el 11 de noviembre de 2021, el Procurador 2º Delegado para la Casación Penal se pronunció en el traslado para elevar peticiones probatorias, indicando que no estimaba necesario el decreto de alguna al interior del presente trámite¹.

2.9. Previo a resolver sobre las solicitudes de prueba, el 10 de febrero siguiente, por existir evidencia de que el solicitado pertenecía a las FARC-EP, la Sala requirió al Alto Comisionado para la Paz para que informara si, en efecto, aquél figura como integrante de esa organización en el listado suministrado por sus representantes al Gobierno Nacional. Así mismo, se consultó a la J.E.P. si el solicitado se sometió al SIVJRN².

En respuesta, la Asesora Jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que, después de verificada la base de datos de la lista de los miembros certificados de las FARC-EP, se emitió la Resolución N° 020 del 18 de agosto de 2017, mediante la cual ARCEDIANO SEGURA fue aceptado como integrante de dicha organización³.

A su turno, la Directora de Asuntos Jurídicos de la J.E.P. puso de presente que el solicitado no ha suscrito Acta de Compromiso, *“sin embargo, cuenta con la Resolución SAI-AOI-AS-PMA-615 del 23 de noviembre de 2021, de la Sala de Amnistía o Indulto, en donde se adoptarán medidas tendientes a ampliar*

¹ Informe secretarial del 6 de diciembre de 2021.

² Auto que hace parte del expediente digital.

³ Oficio del 22 de febrero de 2022 en formato PDF que contiene 13 folios.

información respecto de la solicitud de beneficios del señor Arcediano Segura, la cual se encuentra en trámite”⁴.

2.10. Con auto AP-1802-2022 del 4 de mayo de los corrientes, la Sala remitió las diligencias a la Jurisdicción Especial para la Paz a fin de que adelante el procedimiento tendiente a constatar si existe mérito para activar la competencia de esa jurisdicción y examinar la garantía de no extradición a favor del hoy accionante, de conformidad con el inciso 5° del art. 19 del Acto Legislativo 01 de 2017 y el art. 152 de la Ley 1957 de 2019, sin que a la fecha se haya notificado alguna determinación al respecto.

3. También resulta oportuno advertir que ese Tribunal no es competente para adelantar la acción promovida contra la Sala de Revisiones de la J.E.P; ello, en virtud del artículo 147 de la Ley 1957 de 2019 que dice:

“Procedimiento de la tutela. La petición de acción de tutela deberá ser presentada ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas. La primera instancia será decidida por la Sección de Revisión. La segunda por la Sección de Apelaciones.”.

4. No obstante, si su decisión soberana fuere la de continuar con el conocimiento del trámite constitucional, se resalta que la actuación que se ha surtido hasta el momento por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respecto de la petición de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América contra ARCEDIANO SEGURA, se ha ajustado en un todo a la normatividad aplicable al procedimiento previsto en

⁴ Documento digital del 22 de marzo de 2022 que consta de 3 folios.

la Ley 906 de 2004, regulación atendible al caso concreto, sin que ello atente contra las prerrogativas del gestor del amparo.

5. Por lo anterior, solicito que se desvincule de estas diligencias a esta Corporación.

Con toda atención,



HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado